

La “Ley Televisa: sometimiento del Estado y enajenación del territorio

Virgilio Caballero Pedraza

La “Ley Televisa” fue aprobada a ciegas por la Cámara de Diputados el 1 de diciembre de 2005, y por el Senado el 30 de marzo de 2006 en sesiones carentes hasta de un debate simulado —que no es ajeno al Congreso—, las que pasarán a la historia de la infamia política tan notablemente como las traiciones a la patria cometidas en el siglo XIX, con las que se enajenó una y otra vez el territorio y la soberanía nacionales. Puede afirmarse sin reservas que el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal traicionaron flagrantemente a la Nación con su contubernio a favor de un par de empresas privadas —que en realidad son una en intención—, por demás de hondo espíritu estadounidense. Vale la pena tener en cuenta algunos de los pormenores con que se culminó un proceso fraguado tiempo atrás.

Al mediodía de aquel 1 de diciembre apareció en la agenda del pleno de la Cámara de Diputados el tema de una reforma a las leyes federales de radio y televisión y de telecomunicaciones. El hecho sorprendió no tanto a los legisladores —que casi en su totalidad nada sabían de tal iniciativa—, sino a personajes de fuera del Congreso y a algunos senadores que habían impulsado la reforma democrática de los medios electrónicos de comunicación.

Resultaba insólito que en la Cámara de Diputados se ocuparan de un asunto que estaba fuera de su interés desde por lo menos ocho años antes. En cambio, estuvo en la agenda del Senado —donde recibió golpe tras golpe— y se mantenía latente, con creciente y silencioso interés. Esto pudo observarse en la sesión del 30 de marzo de 2006, a pesar de que una mayoría de senadores al servicio de Televisa y Televisión Azteca se levantaron esa madrugada con el triunfo de haber entregado a esas empresas un poder superior al del Estado nacional.

La sorpresa provenía de la forma sigilosa, prácticamente en penumbras, con que los personeros de Televisa en San Lázaro hicieron avanzar la propuesta de reforma a las dos leyes citadas, saltándose o violentando uno tras otro los requisitos de la normatividad interna del Congreso —a manera de que sólo unos cuantos conocieran el fondo y la forma de la maniobra—, hasta hacerla llegar a la sesión plenaria. Esa fachosa triquiñuela teatral en la que los elegidos por el pueblo dan rienda suelta a las gesticulaciones y las impotencias que ya han tenido su gloria y su desastre en las Comisiones, donde todo se decide.

El Pleno de la Cámara no discutió la iniciativa de reformas. No la conoció, ino se leyó! El líder de la bancada de izquierda, Pablo Gómez, se tomó dos minutos en la tribuna para proponer que se obviara la lectura obligada por la normatividad y se pasara ¡ya! a la votación. ¡Qué poder de convencimiento, cuánta elocuencia espléndida en taimado favor a los intereses antinacionales!

Trescientos veintisiete diputados de todos los partidos presentes en la sesión inclinaron su noble dedo —antes sólo se levantaba, hoy se agacha—, para apretar el botón electrónico que en cinco minutos reveló espléndida unanimidad legisladora para entregar la porción más estratégica del territorio nacional, el espacio radioeléctrico, a un duopolio que se distingue por su lealtad ideológica a los Estados Unidos, por su entusiasmo hacia el *american way of life*.

Era y es tiempo de canallas: los jefes parlamentarios de entonces, con sus más cercanos cómplices, pasaron, como trapevistas en vuelo, de una cámara a otra en la siguiente Legislatura. Ésta que padecemos, como quien cambia sólo de disfraz para seguir gozoso en la comedia santanista, la de la traición sinfín. Ahí siguen fraguando otras ominosas entregas...

Avalada por la prodigiosa velocidad entreguista, la decisión de los diputados intentó pasar por el Senado en el mismo sendero turbio, de política priísta “en lo oscurito”, bien aprendida por todos, pero encontraron la resistencia del grupo de senadores que desde el principio del 2000 había impulsado diversas acciones parlamentarias y recogido iniciativas ciudadanas a favor de hacer de la televisión y la radio recursos orientados al desarrollo general de la sociedad.

Tengo vivo el recuerdo de aquel fin de semana de principios de enero, cuando la iniciativa llegó al Senado y los mensajes electrónicos de alerta y preocupación se reproducían de grupo en grupo, de persona a persona, alertando de la inminencia de un golpe brutal al país y a los esfuerzos de décadas por hacer de los medios electrónicos un bien de la sociedad, como la Constitución lo establece.

Con el respaldo de muchos ciudadanos de fuera del Congreso, Javier Corral, senador panista, impulsó desde el Senado algo más que una resistencia al golpismo de los diputados: logró, con algunos de sus compañeros —Bartlett, Sauri, Cárdenas, del PRI y del PRD—, abrir otro espacio de consulta, uno más, el último de muchos antes de la “Ley Televisa”. En ese espacio confluyeron las opiniones de 48 expertos, decenas de organizaciones civiles, tres organismos de Estado y muchos personajes que evidenciaron, hasta la altura de lo irrefutable, la amenaza que significaba la “Ley Televisa”.

También se presentaron los personeros del duopolio, armados con mínimos razonamientos acerca de lo indefendible, pero con enormes, ridículos, pantagruélicos recursos tecnológicos apantallabobos y muchas amenazas en el discurso y en las conversaciones a trasmano.

La Comisión Federal de Competencia (CFC), la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), y hasta el Instituto Federal Electoral (IFE)—que estaba en pleno entredicho por su parcialidad en el proceso electoral de julio de 2006— comparecieron para advertir que la “Ley Televisa” violentaba, atropellaba a otras leyes, la Constitución incluida.

La CFC hizo ver los peligros de que la concentración del espectro radioeléctrico en unas cuantas manos, ya temible, sería peor con las reformas; la Cofetel dijo que la confusión y el incumplimiento entre una y otra leyes, con el pretexto de que la convergencia tecnológica traía consigo la facultad de que los proveedores de un servicio pudieran ofertar otros sin cumplir la ley respectiva, abatiría precisamente la legalidad; el IFE adelantó acerca del peligro de que los propios candidatos a puestos de elección popular además de sus partidos, puedan contratar publicidad en medios electrónicos. O sea, mucho más dinero inidentificable, sucio, en todo el proceso electoral.

Lo imbatible fueron los liderazgos de los senadores Emilio Gamboa y Enrique Jackson, del PRI, de Héctor Larios y Héctor Osuna, del PAN, que fingieron ignorar todas esas argumentaciones en gran medida provenientes de la sociedad preocupada y alerta; armaron una sólida muralla inmovible desde la que 84 senadores autómatas se opusieron durante 43 ocasiones a que siquiera se discutieran cada una de las objeciones levantadas por los senadores que se oponían a la masacre constitucional a favor de Televisa.

El mediodía y la noche transcurrieron entre la dignidad política de unos cuantos y la miseria moral de los muchos de siempre. Radio Educación me

encomendó la conducción, desde nuestros micrófonos, armado con un televisor en cabina, de esa jornada de 14 horas, que se inició a las dos de la tarde.

Al final, como a las cuatro de la mañana, la traición al país había sido consumada por una clase política que no tiene más rumbo que el de sus míseras aspiraciones, carente, parece que sin remedio, de toda visión de Estado y de Nación.

Como muchas personas preocupadas por el abatimiento de las instituciones de los poderes establecidos en la Constitución, por parte de dos empresas privadas con obvios intereses trasnacionales, opiné en esas horas que el atropello iba mucho más allá que la prohibición constitucional de formar monopolios o incluso violentar los derechos a la información y las libertades de expresar las ideas. Es gravísimo que así sea, como se pretendió, y sin duda se seguirá procurando. Coincido con las deliberaciones, reflexiones, análisis y opiniones que sobre esos temas abundan, pero me pareció más alarmante, desde el principio, el de la soberanía nacional vulnerada, acotada, alienada.

El artículo 42 de la Constitución General de la República señala con claridad que el espacio aéreo por encima del territorio nacional es parte de la soberanía de México.

Las reformas a las leyes federales de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones establecían, de hecho, la entrega a perpetuidad del espacio radioeléctrico al duopolio televisivo que se ha distinguido —si es que fuera poca la disfuncionalidad antisocial de sus tareas cumplidas— por su cercanía a las políticas dispuestas a hacer de México el patio trasero de los Estados Unidos.

Coincidí, por tanto —como muchos otros—, con las 43 objeciones de anticonstitucionalidad que presentaron ante la Corte los 47 legisladores encabezados por Javier Corral, Manuel Bartlett, Dulce María Sauri, y contribuí a divulgarlas en la medida de mis posibilidades.

Hubo esta vez, en el periodo que va del 1 de diciembre de 2005 —fecha que Pablo Gómez conservará para siempre en su memoria— a junio de 2007, tal abundante, copiosa, apasionada, tenaz y eficiente participación de organizaciones ciudadanas, personajes destacados, hombres y mujeres de a pie, para impedir la culminación del atropello que se ultimaba ya en el Senado, que puedo afirmar con certeza que nunca antes el tema de la democratización de los medios de comunicación había logrado tanta y tan sustanciosa participación social. Sin embargo, el Senado saboreó con Televisa su triunfo conyugal. El poder

Legislativo fue sometido *ad absolutem* aquel 30 de marzo, como a las cuatro de la mañana, la hora de los agonizantes...

No valieron ninguna de las más de 30 lecturas que en tribuna hicieron los senadores opuestos al atropello. Solicitaron decenas de veces, siempre como alguien que habla frente a la pared, que se discutieran los artículos flagrantemente opuestos a la letra y al espíritu de la Constitución. No les fue concedido el derecho a debatir sus opiniones. Con la disciplinada complicidad de 84 Senadores, una vez tras otra, la voz siniestra del presidente senatorial Enrique Jackson se levantaba para decir “se rechaza por mayoría de votos la propuesta del senador X a discutir... tal cosa”.

La “Ley Televisa” fue aprobada por el Poder Legislativo y promulgada sin chistar por el Ejecutivo el 14 de abril de 2006. Junto con la entrega de la parte más estratégica del territorio nacional, cedida a perpetuidad a empresarios privados, culminaba un proceso de progresivo sometimiento de los poderes legales al poder de facto de los medios electrónicos; una suerte de golpe de Estado pacífico, respaldado de modo decisivo por el poder distorsionador de los medios electrónicos, al que le faltaba para completarse, el sometimiento del Poder Judicial.

Los debates de junio de 2007 en la Suprema Corte de Justicia de la Nación —ya se sabe— impidieron que el golpe se completara y que se consumara el acto entreguista del territorio nacional, restableciendo, al menos en la perspectiva, un cierto equilibrio republicano al echar para atrás los aspectos más ominosos fraguados por Televisa con el Congreso y con el Ejecutivo.

La esperanzadora intervención de la Corte no fue sin embargo tan oportuna como para interponerse a los efectos destructivos que la “Ley Televisa” propició en el proceso electoral por la Presidencia de la República. No podía. Desde mi percepción, no estaban los ministros en aptitud ni actitud política para dirimir durante los meses tormentosos de mediados del 2006 —de manera que lo hicieron después— el asunto central de los procesos políticos en México: la conducta parcial, arbitraria, autoritaria y decisiva de los medios de comunicación electrónica. De haberlo hecho, es probable que el resultado de las elecciones hubiera sido otro.

El suspenso en que quedó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por los senadores que se oponían a la “Ley Televisa”, que duró exactamente un año, desempeñó sin duda un papel importante en el curso que se dio al juego electoral, caracterizado por la saña con que la guerra sucia electrónica

enturbio el ánimo político y las garantías de contar con un proceso equilibrado, transparente y justo.

A más de un año de aquel 6 de julio se acumulan abundantemente los testimonios, publicaciones, libros, que documentan las múltiples distorsiones de la información y agresiones a la voluntad democrática de la sociedad con los que la televisión mercantil contribuyó para hacer de este periodo de la política que vivimos el más oscuro y ominoso en la historia reciente de México. La Corte no llegó tarde, simplemente no estaba planeado que llegara en esas horas. El poder de las televisoras no fue más allá, pero sigue intacto el que ya tenía y sigue teniendo.